

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 10° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-10744-2020
CARATULADO	: TERNICIEN/FISCO DE CHILE / CDE

Santiago, dieciséis de Febrero de dos mil veintitrés

VISTOS.

Que a folio N° 1, rectificado en folio N° 7, comparece doña Karinna Fernández Neira, abogada, domiciliada en Pasaje Doctor Sotero del Río N° 326, oficina 707, comuna de Santiago, en representación de don Luis Alfonso Ternicien Contreras, pensionado, domiciliado en Avenida Alemania N° 4330, B-26, Cerro Alegre, Valparaíso, quien interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa por don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en Agustinas N° 1687, edificio Plazuela de Las Agustinas, de la comuna de Santiago, por los antecedentes que pasa a exponer.

Hace hincapié en que los hechos que relatara han sido reconocidos de forma voluntaria por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, exponiendo de manera resumida las torturas, vejaciones y otros tratos inhumanos y degradantes a los que fue sometido su representado.

Señala que don Luis Alfonso Ternicien Contreras tiene su registro en la Comisión de Prisión y Tortura N° 24.131, y que nació el 6 de junio de 1952, teniendo actualmente 68 años de edad. Refiere que fue detenido por Carabineros en la tenencia de Putaendo el 2 de junio de 1974, sometiéndolo a prisión política y crueles torturas, en especial en el Centro de Detención y Torturas de la DINA, llamado Londres 38.

Relata que era Jefe de la Aduana del Paso Fronterizo Los Patos, de Putaendo, y que con fecha 2 de junio de 1974 se enteró que Carabineros andaba en busca de él, por lo que se presentó ante la tenencia de esa comuna, lugar en que fue atendido por el teniente a cargo el que le preguntó si tenía problemas políticos, lo que negó. Señala que luego de unos minutos llegó Carabineros, quienes sin mediar explicación alguna lo detuvieron siendo esposado y trasladado a la Prefectura de Carabineros de San Felipe, ingresándolo en una pequeña celda que estaba fría y agreste, la que solo tenía una banca de madera en la que estuvo sentado hasta el día siguiente, además de que no contaba con baño. Añade que ante esta situación, un Carabinero concurrió a la casa de unos familiares en la cual se encontraba su señora, ubicada a dos cuadras de la Prefectura, y le aviso



Foja: 1

que se encontraba detenido, por lo cual le llevó una colación y una frazada. Indica que una vez estando su mujer allí, consultó el motivo de su detención, a lo que se le dijo que volviera al día siguiente a primera hora para que le informaran, puesto que posiblemente sería trasladado al Regimiento de San Felipe.

Sostiene que al día siguiente en la mañana llegaron dos personas de civil a la Prefectura de San Felipe, sin identificarse, quienes lo sacaron del calabozo, le pegaron en el estómago y en la cabeza, y enseguida le colocaron scotch y vendas en los ojos y unos lentes oscuros, para luego trasladarlo a diversos lugares que no pudo ubicar, momento en que fue tratado de forma grosera, con puntapiés, además de amenazarlo con aplicarle la ley de fuga. Indica que finalmente se le llevó a un lugar en el cual se escuchaban voces que al parecer eran de mandos militares, percibiendo que habían varias camionetas, donde se le bajo del vehículo en el que venia y se le dijo irónicamente que “había harto espacio” y “arranca tal por cual”. Cuenta que luego lo subieron a una camioneta, sentándolo al lado del chofer y otra persona, con la vista vendada y lentes oscuros, siendo insultado permanentemente y que lo llevaron a un lugar terrorífico ese mismo día, dándose cuenta después de que se trataba de Londres 38, correspondiente al cuartel de la DINA ubicado en la comuna de Santiago.

Manifiesta que su señora, quien tenía 5 meses de embarazo, concurrió al día siguiente a la tenencia de Putaendo acompañada de su hija de un año de edad, con la finalidad de obtener información sobre él, así como también para visitarlo, lugar en que le indicaron que había sido trasladado al Regimiento de San Felipe. Refiere que su señora como debía concurrir a su lugar de trabajo, se comunicó con familiares con el objetivo de que fueran a dicho regimiento en busca de información y antecedentes de su detención.

Añade que su cónyuge fue hospitalizada, toda vez que presentaba síntomas de fiebre y un cuadro bronquial muy grave que podía afectar su estado de gravedad. Asimismo los familiares consultaron por él en el Regimiento, indicándoles que no se encontraba en ese lugar, por lo que avisaron a su mujer que estaba desaparecido, e interpusieron el recurso de amparo correspondiente, señalándole que la mantendrían informada, lo que le produjo una profunda angustia, ya que no podía hacer nada en ese momento.

Explica que una vez que llegó a Londres 38, lo golpearon en la cabeza y en las costillas, lo que lo desorientó y que unos de aquellos golpes hizo que su cabeza se estrellara en contra de un poste de cemento que se ubicada en la entrada de ese lugar. Señala que enseguida fue conducido a una habitación del segundo piso, donde había varias sillas y lo sentaron junto a otros detenidos, quejándose alguno de ellos por las torturas. Agrega que en este sitio escuchaba



Foja: 1

como torturaban a otros detenidos aplicándoles corriente eléctrica y quemándolos, además que debían dormir esposados y apiñados en el suelo. Indica que se le interrogó y atormentó por un conocido ayudante de la DINA llamado el Guatón Romo, quien le pregunto cuestiones incoherentes, mientras era torturado permanentemente con golpes en los pies y puños en la cabeza y estómago, además de colocar la radio a un volumen alto con el fin de que sus gritos no fueran oídos. Añade que durante varios día se mantuvo con la misma ropa, y no lo autorizaron asearse ni afeitarse y que la alimentación consistía solo en un vaso de agua tibia y un trozo de pan frío.

Enseguida indica, se le condujo al Estadio Chile acompañado de otros detenidos, lugar en que la venda se les retiró, y percatándose que ese centro de detención estaba a cargo de Carabineros. Señala que se les ubicó en la cancha, donde durmieron sobre colchonetas. Revela que en ese lugar pudo avisar a su mujer, quien luego de ser dada de alta lo visitó junto a su hermano, y que después de 2 horas de espera en una fila en un callejón frío, logro pasar a una ventanilla y entregar los alimentos que llevaba. Una vez que ingresó al recinto se les ubicó con otras familias en un pasillo que tenía un mesón largo, sin poder tener contacto físico, y que solo pudieron hablar alrededor de 5 minutos, siempre muy nerviosos, terminando la visita rápidamente. Agrega que los alimentos que le llevaron no se los entregaron.

Narra que posteriormente se le trasladó a Tres Álamos, donde le sacaron fotos y tomaron sus huellas digitales, y que su señora viajo sola desde San Felipe para visitarlo y que no lo encontró, informándole que había sido reubicado a la Cárcel de Santiago debiendo concurrir otro día porque ya no era hora de visitas. Estando allí lo visitó la Cruz Roja Internacional, quienes informaron por escrito al Servicio de Aduana.

Describe que su mujer lo visitó, quien tuvo que llevar lo esencial ya que los registraban íntegramente, y que una vez que la hicieron ingresar le indicaron que ya no se encontraba allí puesto que había sido llevado a Puchucaví, sin embargo no la dejaron irse de inmediato, insistiendo que la dejaran ir puesto que hacía mucho frío y estaba embarazada, lo que no autorizaban, por lo que tuvo que esperar 2 horas para poder irse. En la salida se encontró con sus padres, quienes también habían ido a verlo, por lo que todos fueron al Comité Pro Paz, ubicado en Santa Mónica, lugar en el que consultaron por su situación y lo que podrían hacer, allí los orientaron y confirmaron que estaba en Puchuncaví, entregándole las ayudas necesarias. Añade que su señora viajaba desde San Felipe junto a su hija a la casa de su madre en Valparaíso para concurrir juntas a visitarlo.



Foja: 1

Expone que una vez puesto en libertad, se presentó ante el Servicio de Aduanas siendo reincorporado, atendido que no existía culpa de su parte, lo que consta en el documento del Ministerio del Interior. En dicho lugar fue perseguido políticamente hasta que sus funciones terminaron el 4 de julio de 1979.

Abunda en que luego de lo vivido, su situación laboral y económica se tornó muy difícil, ya que no conseguía trabajo por haber sido perseguido políticamente por lo que tuvo que dedicarse a labores como comerciante independiente, lo que le produjo un gran agotamiento y deterioro a su salud, teniendo que dejar dicha actividad en enero de 2011 para someterse a diversos exámenes que arrojaron un diagnóstico de cáncer en la próstata en el año 2012, lo que conllevó a que le efectuaran 42 sesiones de Radioterapia, y debiendo estar con una Sonda Foley durante un mes, además de controles y exámenes periódicos con oncólogo urólogos y medicamentos de por vida, y una retención crónica de orina. Lo anterior también afectó a su sistema nervioso ya que no duerme por las noches lo que perjudica su calidad de vida atendido, que es hipertenso y presenta artrosis de rodillas, y al mismo tiempo mantiene un futuro incierto ya que el cáncer podría reaparecer en cualquier momento, pasando a tener solo un tratamiento paliativo.

Hace presente que su tratamiento tuvo que realizarlo urgentemente en el Instituto Oncológico del Hospital Naval de Viña del Mar a través del sistema de libre elección de Fonasa, el que tuvo un alto costo. Indica que se presentó en el PRAIS, lugar en que se le entregó por parte de una asistente social, una tarjeta de salud, explicándole los beneficios existentes. En este programa visitó a un médico general, quien le solicitó exámenes, derivándolo al psiquiatra y psicólogo, pero que no continuó con sus atenciones en ese lugar ya que estaba bloqueado y no tenía deseos de relatar lo que le había sucedido. Asimismo, tampoco les confesó a sus hijos lo vivido para no provocarles un trauma, y que solo lo hizo un vez que ingresaron a la Universidad lo que les produjo un gran impacto, además de el reproche por no habérselos contado anteriormente.

Lo rememorado le ha provocado un daño psicológico, moral, económico, físico, no tan solo para él, sino que también para sus familiares que se vieron afectados por estos acontecimientos. Se adiciona el hecho de que jamás supo los motivos de su detención, puesto que nunca se inició un juicio en su contra.

Resume el recorrido experimentado por su representado en aquella época y que consisten en los siguientes; los días 2 y 3 de junio de 1974 estuvo en la Prefectura de Carabineros de San Felipe, entre los días 2 y 1º de junio de 1978 estuvo en Londres 38, lugar perteneciente a la DINA, desde el 10 al 30 de junio de 1974 estuvo en el Estadio Chile, luego entre el 30 de junio al 2 de julio de 1974 se mantuvo en la Cárcel de Santiago, del 2 de julio al 2 de agosto de 1974, estuvo en



Foja: 1

Tres Álamos y desde el 2 de agosto al 4 de noviembre de 1974, estuvo en Puchuncaví. A consecuencia de lo anterior permaneció privado ilegalmente de libertad y sin orden judicial alguna por un total de 5 meses y 2 días.

Finaliza concluyendo que por las torturas sufridas y la persecución política a la que fue sometido su representado, tuvo como consecuencia una severa depresión que mantiene hasta el día de hoy, la que ocasiono además su cáncer de próstata. Revela que persisten las pesadillas en las que revive lo vivido, además de delirios de persecución y un miedo irrefrenable a ser nuevamente detenido en cualquier momento, los que dan cuenta de un diagnóstico de un trastorno de estrés post traumático.

Sostiene que de los hechos invocados se desprende que su representado, de forma inequívoca, y a consecuencia de las torturas sufridas, ha experimentado un perjuicio de índole síquica y física inmenso producido por el Estado de Chile durante el gobierno militar. Dichos daños son permanentes, atendido que independiente de haber trascurrido más de cuarenta años desde que ocurrieron, las personas mantienen las secuelas causadas por efecto de la privación de libertad y las torturas a la que fue sometido.

Cita lo expresado por la Comisión de Prisión Política y Tortura, abundado en que los daños emocionales, morales y materiales causados a las víctimas son lo que se solicitan en esta acción. Añade que los daños físicos y síquicos se visualizan de forma diferente dependiendo de la persona que los experimentó, pero que todos tienen en común el daño moral. Menciona jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema pronunciándose sobre este tipo de daño.

Manifiesta que en razón a lo reseñado precedentemente y en representación del demandante, solicita que por concepto de daño moral ocasionado por el secuestro y la tortura, el pago de \$200.000.000, los que deben ser pagados con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de la notificación de la demanda y hasta su completo pago, más las costas, o el monto que el Tribunal determine de conformidad a su valorización.

Explica que el Estado de Chile ha reconocido de manera expresa su responsabilidad en los secuestros y torturas ocurridas durante la dictadura militar, a través de diversos actos e instrumentos jurídicos, entre los que destacan el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, llamado Informe Valech. En este último su representado fue reconocido como víctima de prisión y tortura. Añade que la responsabilidad del Estado deriva del principio general del derecho administrativo mediante el cual se le obliga a responder por los perjuicios ocasionados por actos



Foja: 1

u omisiones de sus agentes a las víctimas, el que además se ha desarrollado sobre la base de la jurisprudencia y de la legislación especial, la que además es anterior a los hechos juzgados en este caso. Cita la Constitución de 1925 y 1980 para efectos de fundar la responsabilidad del Estado en dichos acontecimientos, y la obligación que recaer sobre esta institución de indemnizar.

Arguye en que la presente acción es imprescriptible, atendido que la responsabilidad del Estado es un problema de derecho público, por lo que deben aplicarse esas normas y no las contenidas en el Código Civil, exponiendo lo dicho en relación a esto por el profesor Eduardo Soto Kloss. Refiere que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia también ha resuelto en el mismo sentido, citando un fallo que recoge la inaplicabilidad de las normas contenidas en el Código Civil.

Señala que las normas constitucionales que consagran la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados en cualquiera de sus actividades, tiene una vinculación directa, sin que sea necesaria la dictación de una norma de rango inferior que disponga su aplicación. Asimismo refiere que la responsabilidad extracontractual del Estado también se encuentra contenida en la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, cuando establece la falta de servicio por parte de ese organismo.

Describe los requisitos que deben cumplirse para indemnizar, señalando que en este caso se cumplen cada uno de ellos, ya que en cuanto al daño moral, este se presume por el solo hecho de haberse cometido un delito, y que dicha acción se originó en un órgano del Estado a través de sus agentes los que torturaron a su representado. En cuanto al nexo causal, es el daño provocado a las víctimas, el que emana de la comisión del delito civil, no existiendo causales de justificación que lo eximan de su responsabilidad.

Abunda en los fundamentos del derecho internacional mediante los cuales se obliga al Estado a indemnizar, toda vez que los hechos que originaron la responsabilidad que se demanda, tienen además el carácter de violaciones a los derechos humanos, por lo que esta responsabilidad también debe determinarse de conformidad a los convenios o tratados internacionales, las que no deben incumplirse bajo el pretexto de que priman las normas de derecho interno. Señala que estas normas además tienen un carácter consuetudinario, las cuales han sido reconocidas por los Estados. Nombra la Convención de Viena la cual refiere sobre esta materia.

Hace presente que la responsabilidad que cabe al Estado es integral, y por tanto debe repararse todo daño que se cause a un particular, dentro del cual



Foja: 1

queda comprendido el daño moral. Para reafirmar lo anterior, alude a jurisprudencia de los Tribunales y de la Corte Interamericana.

Finaliza indicando que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio provocado por el Ejército de Chile en esa calidad, toda vez que se cumple con los presupuestos necesarios para establecer el perjuicio moral que sufrió su representado.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, representado por don Juan Antonio Peribonio Poduje, ambos ya individualizados, sometiénola a tramitación y en definitiva que se acoja en todas sus partes, declarándose el pago de \$200.000.000 al demandante, más los reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo, o el monto que el Tribunal estime, ajustado al mérito de los antecedentes, con costas.

Que a folio N° 18, comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, quien viene en contestar la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasa a exponer.

Realiza un breve resumen sobre la solicitud del actor, refiriendo a que nos encontramos frente a una demanda de indemnización de perjuicios mediante cual se pide que su representado sea condenado al pago de \$200.000.000, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de este, o la cantidad que el Tribunal estime ajustada a derecho, a la equidad, y al mérito de autos, más costas.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, toda vez que el demandante ya fue indemnizado. Señala que el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por transgresión a los derechos humanos debe comprenderse desde el punto de vista jurídico nacional e internacional, con la llamada Justicia Transicional. Añade que uno de los pilares en los cuales descansa esta justicia es en el dilema denominado justicia versus paz, y que tiene como fundamento la necesidad de un país tranquilo que mira sus errores del pasado y con ello pronunciarse sobre el nunca más. Indica que a su vez no debe olvidarse desde la perspectiva de las víctimas la reparación de los daños sufridos, el que juega un rol importante en el reconocimiento de la medida de la justicia buscada por tantos años.

Refiere que las negociaciones entre el estado y las víctimas demuestran que toda reparación es una decisión compleja de destinar recursos económicos públicos que satisfagan ciertos tipos de necesidades públicas a otras radicada en



Foja: 1

grupo de personas más específicos. Dichos intereses se muestran normalmente en la diversidad de contenidos que se proponen como programa de reparación en las Comisiones de Verdad o Reconciliación. Estos programas incorporan beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otros análogos diversos que se remiten a la entrega de una cantidad determinada de dinero y que atendida la complejidad de estas negociaciones, muchas veces se privilegia a algunos grupos por sobre otros o se compensan ciertos daños y se dejan de lado otros o simplemente estos se fijan por vía legal, luego de un acuerdo público.

Sostiene que durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, en relación a la justicia transicional, se arribó a tres objetivos principales los cuales eran a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados; y c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse. Indica que respecto al segundo objetivo, la Comisión de Verdad y Reconciliación, llamada Comisión Rettig, en su informe final, planteó una serie de propuestas de reparación, dentro de las cuales estaba la “pensión única de reparación para los familiares directo de las víctimas”, y algunas prestaciones de salud. Señala que dicho informe originó la dictación de la Ley N° 19.123 mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, siendo el mensaje principal del proyecto de esa ley, el buscar la reparación precisamente del daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas.

Señala que la idea reparatoria se plasmó de forma clara en la ley mencionada, estableciéndose distintos mecanismo a través de los cuales se ha concretado esta compensación, y que esta se ha materializado mediante tres formas; a) reparaciones a través de transferencias directas de dinero, b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específica, y c) reparaciones simbólica. Agrega que a través de aquellas se ha cumplido con el objetivo del proceso de justicia transicional, el que busca precisamente la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En relación a lo anterior, indica que se ha establecido la reparación mediante transferencias directas de dinero, en las que además se incluyó a las personas víctimas de apremios ilegítimos, destacando que la legislación dispuesta al efecto enfrentó dos posiciones que tenían que ver con la entrega de una suma de dinero o bien con una pensión vitalicia, y que en ambos casos los fines eran innegablemente resarcitorios, estimando que a diciembre del año 2015 el Fisco habría desembolsado por este concepto la suma total de \$706.387.596.727.



Foja: 1

Señala que respecto a la pensión mensual, también es una forma de reparar el perjuicio y el cálculo para efectos indemnizatorios se efectúa sumando las cantidades que ya se han pagado bajo ese criterio, adicionando las mensualidades que se deben pagar en el futuro, y con ello es posible apreciar el alto impacto que estas han tenido.

Manifiesta que en cuanto a las reparaciones específicas establecidas en la Ley N° 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, el demandante ha recibido beneficios pecuniarios bajo dicha ley, toda vez que en ella se estableció una pensión anual de reparación, además de otorgar otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos en el anexo listado de prisioneros políticos y torturados de la nómina en la cual se les ha reconocido como víctimas. Señala que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años, de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 años o más y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años. Asimismo indica que la actora recibió recientemente el Aporte Único de Reparación de la Ley N° 20.874 por el monto de \$1.000.000.

Refiere sobre las reparaciones que se han hecho de acuerdo a la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, en el sentido que a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, y de la Ley N° 19.992 se les concedió el derecho a la gratuidad en las prestaciones médicas, dadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en los Servicios de Salud del país, el que se accede concurriendo al hospital o consultorio de salud correspondiente al domicilio del beneficiario, e inscribiéndose en la oficina del PRAIS pertinente.

Añade que además del acceso gratuito a este tipo de prestaciones, el PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario, que atienden de forma exclusiva a los beneficiarios del programa. Asimismo adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios de FONASA, además del derecho a organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de autoridad sanitaria crea, así como también obtienen el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIA en la difusión del programa y la promoción del resto de los Derechos Humanos, ofreciéndoles apoyo técnico y rehabilitación física. Refiere que de igual forma se incorporaron beneficios educacionales, consistentes en la continuación de los estudios básicos, medios y superiores de manera gratuita, el que además se traspasa a sus hijos o nieto en caso de no utilizarse.



Foja: 1

Por último también se les ha entregado beneficios en vivienda a través de subsidios.

Aduce que parte de estos procesos de justicia transicional también es importante la reparación del daño moral ocasionado a las víctimas de trasgresión a los derechos humanos, lo que se realiza por medio de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas trasgresiones. En este sentido, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como la construcción de Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, la fijación del día Nacional del Detenido Desaparecido, mediante el Decreto N° 121, que recae en el 30 de agosto de cada año, la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, establecimiento por Ley N° 20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos, y además de la construcción de distintos memoriales y obras a lo largo del país, así como también de obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, etc.

Hace presente que hasta hoy el Estado ha hecho importantes esfuerzos con el fin de reparar a las víctimas de Derechos Humanos, cumpliendo con estándares internacionales de Justicia Transicional y entregando indemnizaciones acordes con la realidad económica del país, las que han compensado a dichas víctimas por los daños morales y patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos. Por lo anterior indica, que la indemnización solicitada en la demanda como el conjunto de reparaciones ya mencionadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por idénticos hechos, por lo que no procede que sean reparados nuevamente. Cita jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha fallado bajo ese criterio. En el mismo sentido refiere que diversas sentencias han resuelto que el propósito de las leyes dictadas respecto de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de estas, lo que es congruente con las resoluciones emanadas de Tribunales Internacionales respecto a la improcedencia de la indemnización

Expresa que de acuerdo a lo anterior los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado de forma positiva la política de reparación de violaciones de los Derechos Humanos implementada en el país, a tal extremo que ha rechazado otra forma de reparación pecuaria, luego de tomar en consideración los montos ya entregados por el Estado por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Asimismo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha estimado que es beneficioso establecer un



Foja: 1

sistema compensatorio único para todas las víctimas con la finalidad de no provocar desigualdades. Por los motivos esgrimidos opone la excepción de reparación satisfactiva toda vez que el demandante ya ha sido indemnizado.

Opone además la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios de conformidad al artículo 2.332 en relación al artículo 2.497 del Código Civil, toda vez que el demandante en su presentación señala que la detención ilegal, y tortura sufrida ocurrieron durante la dictadura militar entre el 2 de junio y el 4 de noviembre de 1974. A su vez y entendiendo que la prescripción se encontraba suspendida hasta la vuelta de la democracia, también la acción se encontraría prescrita por haber transcurrido en exceso el plazo contenido en la ley. A consecuencia de lo señalado, opone dicha excepción correspondiente a 4 años prevista en el artículo 2.332 del Código de Bello, solicitando acogerla y de este modo se rechace íntegramente la demanda intentada. En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años, prevista en el artículo 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código ya mencionado, toda vez que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la data de la notificación del presente libelo, ha transcurrido con creces el plazo dispuesto en la norma legal ya citada.

Explica las generalidades de la prescripción, señalando que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre de un texto constitucional o legal expreso que así lo prevenga, lo que en este caso no existe. Asimismo indica que la prescripción es una institución universal y de orden público. Añade que en el Código Civil, en el Título XLII del Libro IV, se encuentran contenidas las normas que regulan dicha institución y en específico, en su artículo 2.497 establece las normas de la prescripción en favor y en contra del Estado. Colige que la prescripción no exime de responsabilidad ni elimina el derecho a indemnizar, sino que solamente ordena y pone un límite necesario en el tiempo para que se deduzcan en juicio las acciones pertinentes, existiendo una armonía en las leyes que se rigen esta materia y que en este caso el demandante tuvo muchos años para ejercer dicha acción. Transcribe el extracto de una sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema la que ha declarado que las acciones civiles en estos casos se rigen por las normas del derecho común, toda vez que los tratados internacionales establecen la imprescriptibilidad respecto de las acciones penales, y no de las acciones civiles.

Sostiene que la acción indemnizatoria no tiene un carácter sancionatorio, sino que su contenido es netamente patrimonial, y la cual persigue la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que debe aplicarse las normas



Foja: 1

de prescripción contenidas en el Código Civil. Agrega que, aun cuando el demandante funda la imprescriptibilidad de las acciones en Tratados Internacionales, lo cierto que en ellos tampoco se contempla esa institución en relación a las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad, o bien que prohíban o impidan la aplicación del derecho interno en esa materia. Describe la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra, La resolución N° 3.074 de fecha 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, La Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que en ninguna de ella se establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles. Por lo latamente expuesto, solicita que se rechace la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

Manifiesta que en relación al daño e indemnización pedida, es difícil avaluar y apreciar de forma pecuniaria los daños no patrimoniales sufridos, toda vez que su contenido no es de índole económica, o al menos no directamente, atendido que la indemnización de perjuicio tiene como finalidad restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, entregando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, y con ello quede en el mismo estado previo al acto que le produjo daño. Por este motivo la indemnización del daño moral no se determina ponderando el valor de la pérdida o la lesión experimentada, sino solo otorgándosele a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita minimizar este daño o hacerlo más soportable, a través de una cantidad u otro medio. Indica que no existe una norma legal que regule lo anterior, por lo que se debe estar a los principios generales y básicos de la cuantificación correspondiente a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado. Señala que en este sentido la cifra solicitada por el actor es excesiva, teniendo en cuenta las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios que han fijados los Tribunales de Justicia, los que han sido fijados con mucha prudencia. Cita jurisprudencia de Ilustrísima Corte de Apelaciones y Excelentísima Corte Suprema que ha resuelto bajo ese argumento.

Señala que en subsidio de anterior, su parte alega que respecto a la fijación del daño moral por los hechos relatados, en ellos se deben considerar todos los pagos recibidos durante todos estos años por el demandante de parte del Estado, conforme a las leyes ya mencionadas, las que además seguirán percibiendo a título de pensión, así como también los beneficios extramatrimoniales, cuyo objetivo también es la reparación del daño moral. Añade que el no accederse a



Foja: 1

esta petición, involucraría un doble pago por el mismo hecho, lo que es contrario a los principios jurídicos básicos del derecho. Asimismo señala que debe tomarse en cuenta los montos establecidos en las sentencias dictadas por los Tribunales en esa materia.

Finaliza haciendo presente sobre la improcedencia del pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes solo proceden una vez que se haya dictado la sentencia que acoja la demanda y ordene dicha obligación y que además la misma se encuentre firme y ejecutoriada, por esta razón, no existiendo sentencia dictada en autos, su representado no tiene ninguna obligación de indemnizar y por tanto no existe suma alguna que reajustar, y además estos solo deben ser contabilizados una vez que se dicta la sentencia que los concede. Refiere que en atención a los intereses, el artículo 1.551 del Código Civil insta de manera expresa que el deudor no se encuentra en mora mientras no haya sido reconvenido y haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

Que a folio N° 21, comparece don Luis Pérez Camousseight, abogado en representación del demandante, quien encontrándose dentro de plazo legal evacua la réplica reiterando íntegramente lo expuesto en la demanda, y agregando además otras consideraciones.

Indica que atendido que el Consejo de Defensa del Estado no ha discutido los hechos incoados, no insistirá en ellos ya que han sido expuestos latamente en el libelo.

Sostiene que en relación a la excepción de reparación integral alegada por la demandada, la misma esgrime una serie de leyes que han establecido pensiones para reparar el daño causado a las víctimas, las que de modo alguno impiden que se indemnice con un monto fijado por un Tribunal de la República. Dicha excepción de pago, es irreconocible bajo la normativa internacional, toda vez que el derecho común interno solo se aplica cuando no refuta al derecho internacional en materia de violación a los derechos humanos.

Añade que lo alegado por el Fisco, solo consagra un régimen de pensiones asistenciales, las que no son incompatibles con la indemnización solicitada en este juicio, atendida que dichas reparaciones no compensan de forma íntegra todo el daño que se les provocó a las víctimas. Indica que tampoco existe legislación que disponga la incompatibilidad de estas indemnizaciones, ni que la aceptación de dichos beneficios haga suponer una renuncia a las acciones judiciales correspondiente, y asimismo lo ha establecido la jurisprudencia.



Foja: 1

Revela que en relación a la excepción de prescripción la jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema ha sido enfática en resolver que tratándose de delitos de lesa humanidad cuya acción penal es imprescriptible, también lo es la acción civil indemnizatoria, ya que lo contrario importaría una trasgresión a la normativa internacional sobre derechos humanos, la que es integrante del ordenamiento jurídico interno de conformidad al inciso segundo de artículo 5 de la Constitución. Por lo anterior concluye, que realizar una diferenciación en orden a dividir ambas acciones y con ello entregarles un tratamiento distinto resulta improcedente, y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que requiere, asimismo, aplicar las disposiciones del Código Civil a la responsabilidad ocasionada por crímenes de lesa humanidad, no resulta procedente en la actualidad.

Manifiesta que todo lo reseñado tiene su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional sobre Derechos Humanos y su consagración en los Tratados Internacionales ratificados por Chile, los que obligan al Estado a reconocer y proteger estos derechos. Cita la Convención Interamericana de Derechos Humanos a reafirmar lo señalado.

Abunda que además del evidente daño moral, en este caso estamos frente a una violación a los derechos esenciales de los demandantes por los agentes del estado, lo que hace surgir la obligación de esta institución para repararlos.

Con respecto al monto solicitado de indemnización indica que este se ajusta a derecho, ya que se trata de un daño moral de gran magnitud, toda vez que se afectó la salud mental de sus representados y que por lo demás el Tribunal lo establecerá en su oportunidad.

En relación a los reajustes e intereses, también refiere que están pedidos conforme a derecho, ya que un tribunal fija los montos en un momento determinado pensando en el valor adquisitivo a esa fecha, motivo por el cual se debe considerar su desvalorización.

Que a folio N° 24, comparece doña Ruth Israel López, abogada en representación de la demandada quien estando dentro de plazo legal evacua el trámite de la dúplica, mediante la cual ratifica todas las argumentaciones expuestas en la contestación, las que da por reproducidas, solicitando el rechazo de la acción deducida.

Reitera en lo tocante a la excepción de reparación satisfactiva, y que la misma se dictó con la finalidad de atender en su integridad a la reparación de las



Foja: 1

víctimas y de los familiares de aquellas por delitos de lesa humanidad, la que además recogió los principios del derecho humanitarios impuesto a los Estados.

Agrega que nuestro país ha cumplido con cada uno de estos aspectos, lo que se ha reconocido internacionalmente, e incluso de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo refiere que la acción incoada se encuentra inserta en la denominada justicia transicional, la que permite acreditar que el actor ha escogido los beneficios reparatorios de la Ley 19.123 y sus modificaciones, en el que además se ha incorporado el daño moral de forma expresa así como también establece la incompatibilidad de sus beneficios con las pretensiones de una acción judicial centrada únicamente en lo económico.

Respecto de la prescripción de la acción deducida, insiste en la importancia de la sentencia que unificó la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, la que se transcribo en sus principales argumentos en el escrito de contestación, y la que concluye que las acciones de responsabilidad extracontractual del Estado prescribe en 4 años contados de la ocurrencia de los hechos, según lo previsto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación al artículo 2.497 del mismo cuerpo legal ya citado, agregando que la misma ha estimado que los tratados internacionales de derechos humanos no impiden la aplicación del derecho interno, y en específico a lo expresado sobre la prescripción de la acción civil. Alude a jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha resultado bajo ese argumento.

Que a folio N° 26, se recibió la causa a prueba, fijándose los puntos substanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales iba a recaer.

Que a folio N° 35, se suspendió el término probatorio de conformidad al artículo 6 de la Ley N° 21.226.

Que a folio N° 37, se reanudó el término probatorio de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de la Ley N° 21.379

Que a folio N° 45, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio N° 1, rectificado en folio N° 7, comparece doña Karinna Fernández Neira, abogada, en representación de don Luis Alfonso Ternicien Contreras, quien deduce demanda en juicio ordinario de responsabilidad extracontractual con indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, todos ya individualizados, solicitando tenerla por interpuesta, acogiénola a



Foja: 1

tramitación y en definitiva que se le condene al demandado al pago de \$200.000.000, a favor del demandante, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta su pago efectivo y total de estas, o la suma que el Tribunal determine, con costas.

Funda su demanda, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan expresamente por reproducidos para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Que a folio N° 18, comparece doña Ruth Israel López, en representación del Fisco de Chile, quien estando dentro de plazo legal contesta la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasó a exponer.

Argumenta su defensa, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran esgrimidos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan íntegramente por reproducidos para todos los efectos legales.

TERCERO: Que a folio N° 21, comparece la parte demandante, evacuando dentro de plazo legal la réplica, mediante la cual reitera íntegramente lo expuesto en la demanda, y agregando además otras argumentaciones.

Fundamenta su réplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran presentados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por absolutamente reproducidos para todos los efectos legales.

CUARTO: Que a folio N° 24, comparece la parte demandada, quien estando dentro de plazo legal, evacúa la dúplica, ratificando todas las argumentaciones efectuadas en la contestación.

Basa su dúplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran enunciados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por totalmente por reproducidos para todos los efectos legales.

QUINTO: Que a folio N° 27, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales iba a versar, los siguientes:

1.- Efectividad que el actor hubiera sufrido detención, prisión ilegal, torturas, y apremios ilegítimos ejercidos por parte de la demandada o sus dependientes. Época y circunstancias.

2.- De ser efectivo el punto anterior, si dicha conducta constituye una acción u omisión ilícita cometida con culpa o dolo por parte de la demandada o sus dependientes. Hechos y circunstancias.



Foja: 1

3.- Efectividad que la demandante sufrió los daños o perjuicios señalados en el libelo. Naturaleza, especie y monto de los mismos.

4.- Relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido.

5.- Efectividad de haber operado la reparación integral, por haberse indemnizado al demandado por los hechos que demanda.

6.- Efectividad de encontrarse prescrita la acción. Hechos y circunstancias.

SEXTO: Que, atendida la naturaleza jurídica de la acción incoada en autos, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde a la demandante probar los fundamentos facticos o presupuestos de la acción incoada.

Probada por una parte la existencia de una situación jurídica cualquiera, es permitido a la contraria destruirla y reemplazarla por otra; pero la parte que pretende realizar este cambio debe establecer la modificación que alega. De esta forma, a quien haga una afirmación en juicio, incluso el demandado cuando niega -siempre que en esta negativa vaya envuelta una afirmación- le incumbe la prueba de los hechos en que se basa sus alegaciones.

SÉPTIMO: Que, a objeto de acreditar los fundamentos de su pretensión, la demandante generó la siguiente prueba instrumental no objetada de contrario:

En folio 34:

1.- Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia.

2.- Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

3.- Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

4.- Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

5.- Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo



Foja: 1

Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.-

En folio 39:

6.- Informa anatomía patológica, examen N°664-2012, de fecha 6 de junio de 2012, respecto de Luis Ternicien Contreras, emitido por Humberto Vallejos Atkinson.

7.- Formulario de constancia información al paciente GES (Artículo 24°, Ley 19.966), folio 198956, respecto del paciente Luis Alfonso Ternicien Contreras, de fecha 17 de marzo de 2017.

8.- Diagnostico ecotomografico , respecto de Luis Alfonso Ternicien Contreras, emitido el 13 de febrero de 2018, emitido por el Uruandrologo-Sexologo Juan Andrés Venegas.

9.- Ficha clínica de Luis Alfonso Ternicien Contreras, actualizada al 15 de diciembre de 2020.

10.- Certificado médico de Luis Alfonso Ternicien Contreras evacuado por el Doctor Andrés Danei Lizana, de fecha 16 de Febrero de 2021.

En folio 40:

11.- Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1.

12.- Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1, en la que Luis Alfonso Ternicien Contreras figura bajo el número 24.131.

13.- Copia autorizada de antecedentes de carpeta de don Luis Alfonso Ternicien Contreras del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

En folio 41:

14.- Informe de daño psicológico, respecto de Luis Alfonso Ternicien Contreras, emitido por Juan Antonio Bustamante Donoso, psicólogo clínico y psicoterapeuta de PRAIS, el 7 de diciembre de 2021.

OCTAVO: Que, por su parte, el demandado no produjo prueba alguna en orden a acreditar los fundamentos de su defensa.

NOVENO: Que, entrando al fondo del asunto discutido en autos y sometido a decisión de esta magistratura y en cuanto a la efectividad de existir un hecho ilícito del Estado o sus agentes, ha de considerarse como un hecho público y notorio que en el período comprendido entre el 11 de septiembre del año 1973 y hasta el término del gobierno de facto detentado por las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, existieron casos en nuestro país en que abiertamente se violentaron los derechos humanos y esenciales de personas por parte de agentes



Foja: 1

del Estado. Lo anterior ha sido fallado por diversos tribunales que han destacado la existencia de organizaciones al interior del Estado, tendientes a establecer un régimen sistemático de represión respecto de personas, cuyas ideas o actividades, contravenían las órdenes dadas e impartidas por el gobierno de aquel entonces. A mayor abundamiento tales hechos no han sido discutido en este proceso por la partes y por tanto es pacífico, resultando inoficioso adentrarse a determinar la existencia de ese ilícito.

A mayor abundamiento, del mérito de los instrumentos agregados a folio 34, 39, 40 y 41, a los que se les otorga pleno valor probatorio, como copias de instrumento público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 342 N°3 del Código de Procedimiento Civil, es claro que el actor fue víctima de torturas, vejámenes, y diversos maltratos cometidos por Agentes del Estado de Chile, constitutivos de violaciones a los derechos humanos.

Así las cosas, evidentemente existió una repercusión efectiva en la vida del demandante, en la forma que manifestó en su libelo. De los instrumentos que obran en el proceso, los que no fueron objetados, ni desvirtuados por prueba rendida en contrario por el demandado Fisco de Chile, puede determinarse con exactitud que el de junio de 1974, fue detenido por personal de Carabineros de Chile, en la Tenencia de Putaendo, lugar en que fue víctima de diversos malos tratos, para posteriormente ser trasladado al regimiento de San Felipe, lugar en el que nuevamente estuvo sometido a condiciones de higiene y alimentación paupérrimas. Luego sería trasladado a Londres 38, en donde fue golpeado, torturado e interrogado, para posteriormente volver a trasladarlo, esta vez a Tres Álamos, donde estuvo recluido por unos días, hasta posteriormente ser llevado a Puchuncaví lugar en el que estuvo privado de libertad por alrededor de tres meses

DÉCIMO: Que, encontrándose acreditada la responsabilidad objetiva del Estado de Chile y la forma en que su actuar por medio de sus órganos afectó la vida del actor, es importante tener en vista que tal como lo señalara Norberto Bobbio –doctrina que esta magistratura hace suya-, las normas jurídicas no existen nunca solas, sino siempre en un contexto de preceptos que tienen entre sí relaciones particulares, lo que se acostumbra a denominar ordenamiento, y al que suele definírsele como el conjunto unitario y coherente de normas que rigen en un cierto momento, dentro de un ámbito espacial determinado. En tal sentido es que las normas jurídicas que lo componen, deben estar vinculadas unas con otras coordinada o subordinadamente. Además, los principios generales del derecho o el “espíritu general de la legislación” en los términos del artículo 24 del Código Civil, forman parte del ordenamiento jurídico, viven en su interior e informan sus



Foja: 1

normas e instituciones. De ahí entonces, es que además del derecho interno, nuestro ordenamiento jurídico positivo tiene vinculaciones con el derecho internacional, mismo que ha analizado y se ha pronunciado sobre las implicancias de los hechos que importan la infracción y violación a los derechos humanos, muchos de cuyos textos ya han sido citados por las partes y que en ninguno de ellos se excluye la aplicación del derecho nacional o interno. En el caso de marras, el actor invoca tanto las normas establecidas en la Constitución Política de la República, como artículos de la Ley 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, unidas a las disposiciones contenidas en la Convención de Ginebra y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al efecto, es menester tener presente que el derecho interno de cada Estado, no ha sido excluido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos –normativa aplicable a casos como el de autos- sino que es reconocido en su propio preámbulo, remitiéndose a él con el propósito de consolidar en los Estados Americanos, la defensa y respeto de los derechos esenciales del hombre que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Así, expresamente señala que tiene “justificación la protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos (sic)”. Luego, la normativa que contempla la citada convención se expone como coadyuvante y complementaria al derecho interno de cada estado miembro, sin excepción. Por su parte el artículo 1 consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y a su vez el Capítulo VIII de la Convención, que regula la organización, composición y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 63 N°1, dispone que cuando -esa Corte- decida que hubo violación de un derecho o libertad protegida, dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, y dispondrá asimismo, siempre que fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Es así que esta norma acepta y contempla, entre las competencias de la Corte Interamericana y siempre que fuera procedente, se reparen las consecuencias y el pago de una justa indemnización, es decir, es una norma que fija las potestades de esa Corte para cuando conozca en un juicio determinado.

Dicho lo anterior, es menester señalar que el derecho público interno chileno, es el que justamente permite a este sentenciador conocer y pronunciarse



Foja: 1

sobre el caso de marras, y que le da la posibilidad al actor de accionar y tramitar conforme al procedimiento común ordinario contenido en el Código de Procedimiento Civil, por lo que no se advierte norma alguna que, por tratarse de asuntos de violación a los derechos humanos como fuente de la acción, se vea limitada su competencia ni las facultades que la Ley y la Constitución Política de la República le han conferido, teniendo plena potestad para dar aplicación a la normativa interna, tanto procesal como de fondo. A mayor abundamiento, es precisamente el Código Civil el que entrega por ejemplo, las reglas aplicables en cuanto a la interpretación de las normas, la carga de la prueba y la valoración de ellas frente a un caso determinado.

En consecuencia y por mucho que se trate de una acción indemnizatoria por causa de violación de derechos humanos, no puede perderse de vista que estamos ante un Estado de Derecho, y por ello, existiendo normativa vigente expresa en el ordenamiento jurídico, sea de fuente nacional o supranacional, nada impide al juez su aplicación, pues quien pretenda lo contrario en un caso determinado, ha de hacerlo por medio de otras acciones y ante otras instancias. El hecho de no actuar los Tribunales conforme a lo que se viene diciendo en materia de juicios que involucren infracciones a derechos fundamentales del hombre, sería justamente volver a épocas pretéritas, donde tal Estado de derecho, o bien no existía, o no era respetado.

DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto de lo anterior, el Fisco de Chile debidamente representado por el Consejo de Defensa del Estado, alegó como defensa y excepción, en primer lugar, que el demandante habría obtenido una reparación integral de sus perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, por medio de la entrega de una pensión no contributiva como exonerado político pagadera por la Dirección de Previsión de Carabineros, así como por otras vías diferentes a la simple entrega de una cantidad de dinero, constituidas por actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a las violaciones a los derechos humanos, como son la construcción de memoriales, Museo de la Memoria y Derechos Humanos, establecimiento del día nacional del detenido desaparecido, entre otras.

Resulta necesario tener en consideración, que la acción civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado incoada en autos, tiene por objeto reparar a quienes sufran perjuicios como consecuencia del actuar de funcionarios estatales, y en este sentido, es nuestro derecho interno el que regula la indemnización en sede extracontractual de todo daño que sufra una persona, sin distinción alguna, sin perjuicio de la necesidad de



Foja: 1

probar, en cada caso, la existencia efectiva de los perjuicios que sean consecuencia del hecho dañoso, especialmente según el estatuto de las normas contenidas en los artículos 2.314, 2.316 y 2.329 del Código Civil. En tanto, las pensiones establecidas en las leyes que cita el demandado, constituyen a juicio de este sentenciador más bien beneficios sociales tendientes a cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por Chile, referentes a la dignificación de las víctimas, la consecución de una mejor calidad de vida para las familias directamente afectadas y la obtención, en definitiva, de una democracia plena. Entenderlo de otra forma, no sería coherente, por ejemplo, con las características de los beneficios que otorgan, los cuales quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como la edad o al hecho de estar o no cursando estudios superiores. En consecuencia, las reparaciones en dinero y aquellas denominadas como “simbólicas”, obedecen a esferas y finalidades jurídicas diferentes, por lo que las consideraciones que se tuvieron en cuenta para determinar los beneficiarios de las pensiones de las citadas leyes, no resultan vinculantes para la procedencia de la indemnización civil, puesto que obedecen más bien a razones gubernamentales presupuestarias que se tuvieron en cuenta al dictar la ley y no a la existencia o no de responsabilidad y de perjuicios, lo que ha de determinarse por sentencia judicial y no por dicha Ley, razón por la cual se desestimará completamente dicha defensa.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en segundo lugar y en forma subsidiaria, la demandada planteó como defensa y opuso como excepción, la prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios, por haber transcurrido a su juicio, con creces el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2.332 del Código Civil, contados desde la fecha en que habría ocurrido la detención, privación de libertad y torturas sufridas por el demandado, entendiendo suspendida la prescripción, durante el período de la dictadura militar iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia. En subsidio de lo anterior, invocó el plazo de 5 años contemplado en el artículo 2.515 del Código de Bello, desde que se hizo exigible el derecho a indemnización, en ambos casos hasta la fecha de notificación de la demanda, hecho acaecido el día 1 de septiembre de 2020. Refuerza su defensa afirmando que, el principio general que debe regir la materia es el de la prescripción de la acción de responsabilidad civil, por cuanto no existiría tratado internacional alguno que contenga norma que declare su imprescriptibilidad, respecto del caso sublite. Es necesario tener presente que esta



Foja: 1

argumentación coincide, con la elaborada por parte del Consejo de Defensa del Estado en otras causas relativas a violaciones de derechos humanos.

DÉCIMO TERCERO: Que, en el caso de marras, el fundamento de la acción indemnizatoria civil deriva de un delito catalogado como crimen de lesa humanidad, cometido por funcionarios estatales atentando contra los derechos inherentes a la persona humana, con el monopolio del ejercicio de la fuerza amparado en las normas de orden público vigentes a la época, para cuya protección tiene ahora como respuesta, la aplicación de las normas y principios que conforman el Derecho Internacional que haya sido ratificado por Chile y que en tal condición, se entiende incorporado al derecho interno chileno. Así, y si bien se incorpora entonces, en forma expresa la imprescriptibilidad de la acción persecutora por delitos según la calificación precedentemente señalada, no es menos cierto que ninguno de los cuerpos normativos del derecho internacional que regulan la materia, ha entregado en forma alguna el mismo carácter de imprescriptibilidad a la acción civil resarcitoria, para poder ser incorporarla y hacer aplicación de ella por parte los juzgadores civiles chilenos.

En este sentido cabe preguntarse entonces si el derecho internacional estableció expresamente la imprescriptibilidad de la acción penal, por tratarse de delitos de lesa humanidad que comprometen el interés público que de ellos deriva y por ser inherentes a toda persona humana, por qué no reguló de igual manera a la acción civil de reparación. La explicación, a juicio de este sentenciador, se contiene en que la acción civil de indemnización de perjuicios apunta a un aspecto patrimonial de la reparación, que no es propia ni inherente al interés público comprometido en los hechos de lesa humanidad. A mayor abundamiento, resulta de público conocimiento que las distintas Cortes Internacionales cuando han entrado en conocimiento de las materias que le han sido reclamadas en la esfera de sus competencias, lo han hecho en aquellas demandas que dicen razón con aspectos de tal relevancia, que han decidido ejercer su jurisdicción, a pesar que gozan de la facultad de determinar qué demandas son de su interés y cuales entran a conocer, precisamente en consideración a la relevancia pública internacional que ello implica. Así, en estos términos, las acciones que buscan únicamente un resarcimiento patrimonial de los afectados, si bien pueden resultar atendibles por la naturaleza de los hechos que le resultan de antecedente, no tienen ni el carácter ni la relevancia suficiente para ejercer jurisdicción, por lo cual, son siempre de conocimiento exclusivo de cada legislación interna.

Tampoco puede pasar inadvertido a este sentenciador, la existencia de normas expresas en el ordenamiento jurídico chileno que establecen la



Foja: 1

prescripción de las acciones civiles que pueden deducirse por toda persona ante un Tribunal que tenga competencia para ello, especialmente atento a que no existe norma internacional que lo limite, siendo imperativo a todo Juez la aplicación de la prescripción, una vez invocada por quien la pretende y siempre, por cierto, cuando se den los supuestos que la Ley impone y autoriza para ello. Esto, sin dejar de tener presente la finalidad de dar certeza jurídica que tiene la institución que se analiza, la que en todo caso, también importa obtener la paz social de todos los involucrados. En este mismo orden de ideas, es menester reiterar que es el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la que establece dentro de la competencia de la Corte Interamericana, la posibilidad, en caso de ser procedente, del pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Sin embargo, nada dice respecto de la imprescriptibilidad de la acción de reparación civil.

Por lo tanto y con todo lo ya razonado en este considerando, es que se afirma por esta magistratura que no hay sustento normativo, ni nacional ni internacional, para no dar aplicación en autos, a la prescripción de la acción civil reparatoria intentada.

DÉCIMO CUARTO: Que, en ese mismo orden de ideas, lo que en autos intenta el actor, como ya se ha mencionado, es una acción de naturaleza civil ante este Juzgado de dicha competencia, particularmente la acción de indemnización de perjuicios de daño patrimonial y extrapatrimonial –moral- por responsabilidad extracontractual, en este caso del Estado de Chile, teniendo aplicación además de los otros cuerpos normativos ya citados, las disposiciones del Código Civil ya indicadas en la motivación octava, que establecen el principio de responsabilidad e indemnización de todo daño o perjuicio producido por un delito o cuasidelito. En ese sentido, no es dable pretender ampararse en un instituto jurídico para demandar, como la responsabilidad extracontractual civil del Estado y pretender extraerse de algunas de sus consecuencias que no le resultan beneficiosas al actor, como lo es la prescripción bajo las normas del derecho interno civil. Dicho de otro modo, acciona el actor conforme a las reglas de competencia de orden público interno y sin embargo, además de no existir norma expresa de imprescriptibilidad en tratados o normas internacionales, pretende que se desatienda la normativa que por mandato constitucional, está llamada a aplicar.

DÉCIMO QUINTO: Que, constituye un principio general del derecho, la prescriptibilidad de las acciones, fundado en la necesidad de garantizar la estabilidad, seguridad y certeza jurídica, que encuentra sustento legal en el artículo 2.332 del Código Civil respecto de la prescripción de la responsabilidad



Foja: 1

extracontractual. Aquella disposición nos indica, que las acciones que concede aquel título -XXXV de los delitos y cuasidelitos- por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto. Las normas de prescripción que contiene el Código Civil, resultan aplicables a favor y en contra del Estado, según reza el artículo 2.497 del mismo cuerpo normativo, por lo cual deben ser aplicadas en el caso sub lite, toda vez que justamente se persigue la responsabilidad civil del Estado, no existiendo norma en contrario en otra disposición legal.

En este sentido, considerando que la detención y posterior liberación de Luis Alfonso Ternicien Contreras transcurrió durante los meses de junio a noviembre del año 1974, y teniendo en consideración las disposiciones legales recién citadas, acogiendo, por otro lado, la teoría elaborada por la Excelentísima Corte Suprema en la sentencia de fecha 21 de enero del 2013, causa Rol N° 2182-1998, que atenúa la aplicación irrestricta de ellas y considera que los titulares de la acción indemnizatoria no se encontraban en condiciones de haberla ejercido, en tanto no exista la información necesaria y pertinente para hacer valer ante Tribunales de Justicia su derecho al resarcimiento por el daño sufrido, así como su condición de víctima, lo que se debe entender producido el día en que se constituye el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, esto es, el día 4 de marzo del año 1991, tenemos en consecuencia que, a la fecha de interposición de la demanda y más aún, a la fecha de notificación de la misma, ha transcurrido con creces el plazo para que proceda la prescripción extintiva de la acción, razón por la cual debe necesariamente ser acogida la excepción opuesta, como se dispondrá en lo resolutivo del fallo.

DÉCIMO SEXTO: Que, en virtud de lo que ya se viene razonando, este sentenciador no emitirá pronunciamiento respecto de los daños reclamados, por resultar inoficioso e incompatible con lo ya resuelto.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo analizado precedentemente, atento con los hechos acreditados y suficientemente relatados en las motivaciones anteriores, tuvo motivo más que plausible para litigar en estos autos, en conformidad con el artículo 144 del Código Adjetivo Civil, por lo que no se le condenará al pago de las costas generadas en la presente causa, las que serán soportadas por ambas partes.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo dispuesto en los artículos 24, 1.700, 1.706, 1.71, 2314, 2.316, 2.329, 2.332, 2.492, 2.514, 2.515 y siguientes del Código Civil; artículos 138, 140, 144, 160, 170, 254, 342, 358, 426 y



Foja: 1

siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1, 5, 6, 7, 19, 20 y 38 de la Constitución Política de la República de Chile; artículos 2, 3, 4 y 44 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado N° 18.575; y disposiciones pertinentes de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención de Ginebra; y demás instrumentos del derecho internacional pertinente, se declara:

I.- Que, **SE ACOGE** la excepción de prescripción opuesta por la demandada, conforme lo razonado en los motivos pertinentes, y en consecuencia se rechaza la demanda de folio 1; rechazándose en todo caso las demás defensas deducidas por la parte demandada;

II.- Que, cada parte pague sus costas.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Pronunciada por doña Karina Portugal Cuevas, Jueza Suplente del Décimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dieciséis de Febrero de dos mil veintitrés**



